

Algunos rasgos socio políticos de la dictadura brasileña (1964 – 1985) y sus efectos en América del Sur*

Algumas características sóciopolíticas da ditadura brasileira (1964-1985) e seus efeitos na América do Sul
Some socio-political features of the Brazilian dictatorship (1964-1985) and its effects on South America

Arturo Fernandez**

Resumen- El trabajo estudia, desde una perspectiva comparada, algunas características estructurales de la dictadura brasileña de 1964 y su impacto en América del Sur y, particularmente, en la Argentina. El análisis se focaliza sobre un punto de vista crítico acerca de la Doctrina de la Seguridad Nacional, implementada como consecuencia del entrenamiento proporcionado por Estados Unidos a los militares brasileños y latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, se subraya que dichas dictaduras eran cívico-militares e intentaron destruir cualquier posibilidad de variadas resistencias populares. El período histórico seleccionado presenta similitudes entre la dictadura brasileña y las sudamericanas; pero estos regímenes tuvieron diferentes trayectorias y resultados, como lo demuestra el caso argentino.

Palabra clave: doctrina de la seguridad nacional; dictadura cívico-militar; resistencias populares.

Resumo- O artigo analisa, numa perspectiva comparada, algumas características estruturais da ditadura brasileira em 1964 e seu impacto na América do Sul, especialmente na Argentina. A análise centra-se em um ponto de vista crítico sobre a Doutrina da Segurança Nacional, implementada como um resultado da formação ministrada pelos Estados Unidos para os militares brasileiros e latino-americanos no contexto da Guerra Fria. No entanto, ressalta-se que estas eram ditaduras civis-militares e tentaram destruir qualquer possibilidade de resistências populares diversas. O período histórico selecionado tem semelhanças entre a ditadura brasileira e sul-americana; mas tais regimes tiveram diferentes trajetórias e resultados, como mostra com o caso argentino.

Palavras-chave: doutrina da segurança nacional; ditadura civil-militar; resistências populares.

* Algunos rasgos socio políticos de la dictadura brasileña (1964-1985) y sus efectos en América del Sur.

** Abogado (Universidad de Buenos Aires); doctorado y posdoctorado em Ciencias Políticas y Sociales (Université Catholique de Louvain); Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y Profesor Titular Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. *Correspondência:* Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, Sede Marcelo T. de Alvear: Marcelo T. de Alvear 2230 – C1122AAJ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina. E-mail: <afernandez@ceil-conicet.gob.ar>

Abstract- The paper studies, from a comparative perspective, some structural causes and features of 1964 Brazilian dictatorship and its impact on South America and particularly Argentina. The analysis focuses on a critical view about National Security Doctrine, implemented as consequence of the United States military training of Brazilian and Latin American armies in Cold War context. Nevertheless, it outlines that those dictatorships were civil-military and they tend to destroy any different popular resistances. The selected historical period presents similarities between Brazil and South American dictatorships but these regimes had different trajectories and results, as it is shown by the comparison with argentinian case.

Keywords: national security doctrine; civil-military dictatorships; popular resistance.

Introducción

El supuesto general, que se trata de demostrar en esta comunicación, es el carácter heterogéneo – pero estrechamente vinculado – de ciertas realidades sociales y políticas sudamericanas, partiendo de una experiencia histórica significativa, así como de sus consecuencias sobre las realidades de las sociedades y los Estados de la región.

Se utilizarán algunos criterios politológicos y de Política Comparada para analizar los efectos de la dictadura brasileña que se inició en 1964, en particular en el caso de Argentina y con repercusiones en toda América del Sur. Este tipo de estudio tiene cierta flexibilidad interpretativa, sin apartarse del rigor que deriva de los resultados de la investigación histórica.

¿Qué lugar ocupa la Política Comparada en América del Sur? *En general se puede percibir un cierto desajuste entre el conocimiento de la realidad política, social y estatal predominante en medios académicos de primer nivel que desarrollan política comparada y la comprensión de las realidades periféricas.* Esa producción académica mayoritaria y de mejor calidad estuvo marcada por el estudio de procesos políticos socio estatales y de relaciones interestatales, a través de esquemas teóricos creados en Occidente. Aunque dichos esquemas resultaron a menudo insuficientes para reflejar la vida política de las sociedades y los Estados de la periferia del mundo capitalista, siguen siendo predominantes.

Es sintomático de lo dicho anteriormente que no debe hacerse la siguiente constatación: la mayoría de la bibliografía internacional, replicada por muchos autores sudamericanos, no dio cuenta precisa de los cambios sociales y políticos que se registraron en diversos Estados de Sudamérica durante el siglo XX. Es deseable que las percepciones de Política Comparada de nuestra época se acerquen más a la realidad. Ello depende, en gran medida, de estudios capaces de tomar distancia de supuestos epistémicos y teóricos sólo aplicables a países desarrollados o a períodos históricos pasados. No se trata de hacer ciencias nacionales o regionales, porque ello atentaría

contra la razón de ser del conocimiento científico; al contrario, se trata de adecuar ese abordaje racional a las realidades que se estudian, explicando lo que “realmente” es y no aquello que “debe ser” o lo que se desearía que fuese.

Frente a estas cuestiones caben posiciones distintas, porque la comunidad académica debe aceptar el pluralismo ideológico y cultural, el cual legitima la diversidad de interpretaciones. Esta reflexión sólo pretende recordar que la ciencia no crea la realidad sino que la devela y que ésta es una tarea esencial de la sub-disciplina Política Comparada; asimismo se expresa que nuestro enfoque prioriza las luchas por la justicia social y los procesos de resistencia contra la explotación del ser humano por otros, comprendiendo que esta opción valorativa sólo es parcialmente compartida. Tratamos de no hacer comparaciones que sirvan para legitimar sistemas sociales injustos, tal como los existentes en países sudamericanos; y, al contrario, buscamos encontrar categorías sencillas que permitan develar los mecanismos de funcionamiento del sub-desarrollo. Por otra parte, cierta formalización rigurosa de la observación política “interna” de un Estado impide observar la importancia de la intervención externa. En el caso de este artículo, es irrisorio abordar la dictadura brasileña y sus efectos sin tener presente el rol decisivo jugado por los Estados Unidos.

1.Contexto de las sociedades y los Estados de América del Sur: los casos de Brasil y Argentina

Diversas características políticas y sociales acercan y diferencian el funcionamiento de las sociedades y los Estados que existían en América del Sur en los años sesenta. Analizamos algunas de las principales que conformaban su contexto socio-político, subrayando que ellas son inherentes al subdesarrollo, el cual resulta equivalente a la desintegración social: señalamos esas características, sin pretender hacerlo de forma exhaustiva.

a) *Una estructura económica desarticulada*, cuya incorporación más o menos compulsiva al mercado mundial capitalista, ocurrida a fines del siglo diecinueve, implicó el predominio de la producción agraria y/o minera. Esa desarticulación se acentuó como consecuencia de la crisis de 1930 y no se resolvió adecuadamente, en la medida que los Estados sustituyeron importaciones pero su sector externo mantenía sus lazos de dependencia con el correspondiente *centro* capitalista que adquiría las materias primas. La industrialización ulterior a dicha crisis fue significativa, pero todavía no había condiciones económicas de integrar la industria pesada ni desarrollar la innovación científica y tecnológica. Por ello, aun los países más dinámicos de este tipo habitualmente mostraban un dualismo en su perfil económico: por un lado, un sector capitalista moderno con niveles de producción que abastecían el mercado interno; y, por el otro, un

sector tradicional basado en actividades extractivas de materias primas, las cuales eran propiedad de empresas extranjeras o tenían insuficiente dinamismo capitalista.

b) *Una burguesía nacional débil y, a menudo, carente de habilidades para dirigir la sociedad en su totalidad;* lo cual podía verificarse en muchos países observando el poco desarrollo tecnológico auto generado en las compañías autóctonas, el cual contrastaba con el costoso y aristocrático “estilo de vida” practicado por muchos de los miembros de esos sectores burgueses.

Las limitaciones políticas de esta burguesía se expresaban políticamente en su dificultad para formar partidos políticos que contaran con apoyo popular masivo y, en consecuencia, pudieran alternar en el gobierno con los partidos representativos de las clases medias y subalternas en elecciones libres.

c) *Una clase obrera con un desarrollo organizacional escaso o relacionado con el Estado en menor o mayor escala.* Su situación fue históricamente diferente de la de sus homólogos en países desarrollados y, por lo tanto, las estructuras de sus sindicatos también tomaron características distintas. La relación entre las actividades económicas en el campo y las de las ciudades también fue distinta en un caso y el otro, lo cual contribuyó a crear diversas clases de mercados laborales; esto tuvo indudables consecuencias sobre la vida de los sindicatos, en la medida que dicho mercado fue definido por el poder político. Ello impedía la formación de partidos obreros con gran capacidad de movilización y surgidos desde la sociedad civil. Es así que los sindicalismos sudamericanos más numerosos hasta 1970 fueron impulsados desde el Estado en Brasil, Argentina y Venezuela. No fue ajena a esta afirmación la represión de los sindicatos clasistas y de los Partidos Comunistas.

d) *Un Estado con una acción social altamente conflictiva y compleja,* la cual derivaba de la mencionada desarticulación de la economía, de la imposibilidad de cobrar impuestos proporcionales a la riqueza, de la existencia de una pobreza estructural de amplios grupos rurales y urbanos marginales y de conflictos ideológicos y políticos que habitualmente tenían profundas raíces históricas adoptando formas clasistas, étnicas y lingüísticas. Por ello, en América del Sur, no funcionaron reales Estados de Bienestar, aun en países que tuvieron ciertas acciones sociales después de 1930.

e) *El predominio de ideologías y valores tradicionales que coexistían con los peculiares de una sociedad moderna, y los condicionaban o los deformaban.* El desarrollo capitalista dio origen a principios liberales sobre el poder y el Estado que animaban la democracia política; esos principios se universalizaron y prevalecieron en los países desarrollados recién después de la Segunda Guerra Mundial, así como los pactos sociales entre burguesías y movimientos obreros organizados. Sin embargo, cuanto mayor fue el subdesarrollo (o desintegración social) de los países periféricos, más

frecuente resultaba la supervivencia de ideologías políticas (o que afectaban la vida política) que se oponían a esos principios liberales.

Por ejemplo, la tolerancia y la libertad religiosa y, consecuentemente, la separación de la esfera de acción del Estado en relación con las iglesias, es un elemento básico del pluralismo democrático. Varias naciones sudamericanas donde esta clase de sistema político se había formalmente adoptado, sufrían la exorbitante influencia de la Iglesia Católica en asuntos temporales, lo cual afectó con frecuencia su desarrollo democrático. Las ideologías tradicionales en vigor en los países subdesarrollados estaban basadas, por lo general, en estructuras sociales y organizaciones que competían en la lucha por el poder y, a menudo, predominaban sobre los partidos políticos y las instituciones modernas que podrían haber mediado en el conflicto capital-trabajo y haber intentado encauzarlo a través de la negociación y el pacto sociales. En general, las corporaciones eclesiásticas, militares y representativas de los terratenientes desarrollaban valores anti-democráticos e imponían sus creencias a un alto porcentaje de sectores medios y populares.

Las características económicas, sociales, políticas y culturales que hemos delineado hasta ahora constituyeron hábitos, regulaciones y automatismos que se correspondieron con un patrón de desarrollo basado en la sustitución de importaciones.

Aun así, después de la Segunda Guerra Mundial, se instauraron democracias políticas en América del Sur con la anuencia de Estados Unidos y, entonces, los pueblos pudieron elegir sus gobiernos con cierto grado de libertad. El tipo de representación política democrática implicaba un acuerdo entre los electores y sus representantes, a través del cual los últimos se comprometían a mantener sus promesas electorales. En la medida que la voluntad de la mayoría de los votantes se respetó, algunos partidos reformistas, sobre todo de ideología nacionalista popular, llegaron al gobierno e intentaron modificar algunas estructuras tradicionales, enfrentándose con las clases dominantes.

Es aquí donde aparecen claras similitudes entre la situación brasileña y la argentina. En ambos países emergieron nacionalismos populares (llamados populismos casi siempre de forma despectiva) que dirigieron sus Estados con Getulio Vargas en los años treinta y con Juan Perón en 1945; esta tendencia político ideológica latinoamericana procuró construir Estados nacionales sólidos, para lo cual intentaron industrializar sus economías y facilitaron el desarrollo de sindicalismos adictos que atenuaran la explotación y la desigualdad social en el marco del capitalismo. La reacción de los sectores agroexportadores tradicionales condujo a un alto grado de conflictividad en los dos casos, el cual está simbolizado por el suicidio de Vargas en 1954 y el sangriento derrocamiento de Perón en 1955. Es cierto que en esos años se manifestaba en ambos países la imposibilidad de integrar

el ciclo industrial sin participación del capital y la tecnología transnacionales, lo cual aumentaba las contradicciones sociales.

Pese a todo ello, los Partidos Políticos nacionalistas populares seguían siendo mayoritarios y su reformismo irritaba a los grupos económicos más concentrados, que lograban apoyos en diversas capas medias y establecían una alianza perdurable con las Fuerzas Armadas. En 1961, el “Partido Trabalhista” brasileño conservó la vice-presidencia con João Goulart, integrando una fórmula bipartidista, encabezada por el centrista Janio Quadros. El Presidente inició su mandato con algunas tibias reformas que fueron rechazadas por el Parlamento, lo cual condujo a su inesperada renuncia a los siete meses de haber asumido. Entonces, la derecha y las Fuerzas Armadas impusieron un sistema parlamentario para controlar a Goulart, resistido por sus ideas reformistas. Los proyectos de Goulart consistían en cambios modernizantes que hubieran favorecido el desarrollo del capitalismo, en particular el de iniciar una Reforma Agraria que eliminase el latifundio improductivo. La polarización social que generó el “trabalhismo” progresista se acentuó cuando el Presidente logró que el Parlamento retornase al sistema presidencialista en 1963, lo cual reforzaba su capacidad de decisión. La movilización social que se había generado incrementó el odio de los grupos sociales hegemónicos, quienes optaron por la intervención militar con el apoyo de Estados Unidos.

En Argentina, el Partido Peronista (o Justicialista) fue proscrito en 1955 tras un golpe militar, pero continuó siendo la primera gran minoría gracias al voto obrero y popular, haciendo de la democracia política una burla a la voluntad mayoritaria. Los gobiernos electos de Arturo Frondizi (desarrollista) y Arturo Illia (Unión Cívica Radical) tenían escasa legitimidad y estaban sometidos al control militar. En realidad, todos los partidos políticos habían permitido la militarización de la política en 1955 al buscar la intervención de las Fuerzas Armadas para terminar con el peronismo. El movimiento obrero, organizado en sindicatos, resistía con éxito a los intentos de “desperonizar” el país, lo cual condujo a un cierto grado de polarización social. Después del golpe brasileño de 1964, los militares argentinos proyectaron imitar a sus pares brasileños y hacerse cargo del país para combatir al peronismo y al comunismo y crear un nuevo orden político.

En otros países sudamericanos, el nacionalismo popular tuvo diversas proyecciones ideológicas y políticas: fue una fuerza intrascendente (el caso de Chile y Ecuador) o no existió (el caso de Uruguay); el APRA peruano estuvo proscrito durante décadas y recién tuvo la posibilidad de acceder al gobierno en 1980; la derecha conservadora colombiana asesinó al líder Jorge E. Gaitán, de matriz nacionalista popular, generando una violenta guerra civil; el Partido Febrerista, de esa misma tendencia político-ideológica, fue proscrito y perseguido en Paraguay desde 1947 y, luego, por la dictadura de Alfredo Stroessner. Sólo llegaron al gobierno el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia (1952) y el Partido Acción

Democrática en Venezuela (1958); sus logros, evolución y eclipse serían objeto de otro artículo.

2. Algunos rasgos de la dictadura brasileña iniciada en 1964

A continuación se desarrollan rasgos relevantes del gobierno militar brasileño que influyeron en otros regímenes castrenses de la región, instaurados después de 1964.

2.1. La aplicación de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”

Los militares brasileños adoptaron y aplicaron la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual era una adaptación al contexto latinoamericano de la guerra antisubversiva desarrollada, a fines de los años cincuenta, por estrategias norteamericanos y franceses para enfrentar las rebeliones de los pueblos colonizados y, sobre todo, el accionar del comunismo mundial. No todas las insurrecciones anticolonialistas eran dirigidas por Partidos Comunistas, pero la Unión Soviética solía apoyarlas, por lo cual el Occidente decidió homologar luchas de liberación y activismo soviético. Esta doctrina estaba estrechamente ligada a la existencia de un bloque no capitalista que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual condujo a la denominada “Guerra Fría” conducida por las dos superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética.

La guerra subversiva sería, según este enfoque, el producto de la acción comunista para destruir el “mundo libre” a través de la infiltración de su ideología, de tipo totalitario. Después de 1957 los bloques occidental y soviético habían llegado a una paridad relativa desde el punto de vista militar, a partir del momento en que los soviéticos tuvieron la capacidad nuclear de infligir destrucciones irreparables a los norteamericanos en su propio territorio. Se consideraba que siendo muy improbable un ataque frontal, el bloque comunista organizaría agresiones limitadas contra Occidente. Esas acciones serían organizadas en las colonias o en países periféricos subdesarrollados para destruir la dominación capitalista en vastos continentes ricos en materias primas que abastecían a bajo precio a los países desarrollados y que eran mercados de sus manufacturas.

Se identificaban las luchas por la independencia nacional (como la de Argelia) y las tentativas de modificar un sistema social injusto (como las de Guatemala) con manipulaciones del comunismo internacional. Se afirmaba que esos pueblos estaban constituidos por masas incultas o, al menos poco politizadas, y, en consecuencia, inclinadas a la demagogia comunista o de partidos políticos equivalentes que se oponían a la dominación capitalista y a las humillaciones de la colonización. Estos actores políticos serían irracionales y adoctrinarían a sus miembros en el marxismo, considerado como una fe cuasi religiosa que conduciría a sus “creyentes” a

la guerra revolucionaria total destinada a destruir las estructuras que se les oponían. La denominada guerra revolucionaria y la guerra psicológica exigían que el “mundo libre” adoptase técnicas antisubversivas eficaces, equivalentes a la acción terrorista que se atribuía a los grupos comunistas insurgentes. Se trataría además de prevenir las acciones violentas a través de una acción psicológica sobre las masas a fin de evitar que cayesen en mitos equívocos e irracionales. Sería la tarea de convencer a pueblos oprimidos y pobres que la dominación capitalista era una realidad soportable o, al menos, inmutable y/o natural.

La Doctrina de la Seguridad Nacional se aplicó en América Latina a partir de la decisión de Cuba de transformarse en un Estado marxista-leninista y aliado a la Unión Soviética para evitar que Estados Unidos invadiese la isla y destruyese los avances de la revolución cubana. Cabe recordar que el régimen castrista fue un nacionalismo popular que llevó a cabo una reforma agraria que afectó intereses norteamericanos, tal como había sucedido en Guatemala en 1954; la radicalización ulterior del régimen castrista fue, en buena medida, inducida por el intervencionismo de Estados Unidos. Luego, Cuba pasó a ser visualizada como un faro de justicia social y de dignidad por actores sociales y políticos de la región latinoamericana, ansiosos de alcanzar en sus propios países esos inexistentes valores. Frente a ese desafío, el Presidente Kennedy decidió la expulsión de Cuba de la OEA, lanzó el programa de la Alianza para el Progreso y reforzó el dispositivo de seguridad hemisférica a través del “*Southern Command*”, establecido en la Zona del Canal de Panamá. Ese mismo año se creó, también en Panamá, la denominada Escuela de las Américas, en la cual un número creciente de oficiales de las Fuerzas Armadas latinoamericanas fueron entrenados en la guerra antisubversiva y en una ideología anticomunista primitiva. Al lado de la Escuela de las Américas se instaló la Academia Interamericana de Fuerzas Aéreas que prepararía aviadores militares en el mismo tipo de ideología y acción antisubversivas. Hacia 1975, 30 mil militares latinoamericanos habían pasado por la Escuela de las Américas y 10 mil oficiales de las Fuerzas Aéreas siguieron cursos en la Academia Interamericana. La consecuencia de esta formación es la creciente homogeneización de las Fuerzas Armadas de la región, lo cual condujo al fin del tradicional caudillismo militar que imperaba desde el siglo XIX. En muchos casos, la Doctrina de la Seguridad Nacional le dio un sentido a la vida de militares que no habían vivido guerras, creándoles el “enemigo interno” y las técnicas para combatirlos, además de legitimar la vocación política de algunos de ellos.

Es preciso reconocer que Brasil tuvo sus propios teóricos de la Seguridad Nacional que no homologaron mecánicamente el interés norteamericano con el brasileño, lo cual no sucedería en otros países de la región. Ello se debió a una política exterior de largo aliento que se inició con la decisión de Getulio Vargas de participar en la Segunda Guerra Mundial a cambio de un proyecto económico significativo, tal como el desarrollo

de la siderurgia; de una dirigencia social capaz de transformarse en una burguesía interesada en comerciar con las ex colonias portuguesas de África, al margen de la opinión norteamericana; y, quizás, a la capacidad política de figuras como el General Golbery Couto e Silva, teórico de la seguridad nacional y dirigente de la dictadura militar, quien, después de 1974, se transformó en el impulsor a la transición a la democracia política.

2.2. La instauración de un régimen cívico militar fundacional

La dictadura brasileña iniciada en 1964, no fue un clásico gobierno militar que había derrocado a un partido o grupo político para luego llamar a elecciones y devolver el gobierno a los civiles; se trataba de una acción cívico militar dirigida por los grupos socioeconómicos más influyentes, con sólidos apoyos en la clase política, en sectores medios, en la dirigencia de la Iglesia Católica y en los medios de comunicación más influyentes. Ellos habían acordado entregar la conducción política del país a sus Fuerzas Armadas para prevenir el supuesto avance del comunismo y refundar la República; su finalidad fue lograr el crecimiento económico en una alianza con el capitalismo transnacional norteamericano, el cual privilegiaría a Brasil como destino de sus inversiones. El golpe militar fue planeado con minuciosidad por la conducción de las Fuerzas Armadas que neutralizaron con anticipación a oficiales y suboficiales que podrían haberse opuesto a sus planes, dándoles de baja; en última instancia, hubiesen sido eliminados físicamente. Luego, con el mismo método, el Alto Mando militar supo evitar que apareciesen líneas disidentes a su proyecto político entre los oficiales castrenses.

El proyecto económico de la dictadura fue un proceso no exento de pugnas entre los diversos grupos de interés nacionales y transnacionales. Se trató de generar una economía de mercado en la cual estuviese limitado el rol del Estado en relación a la era varguista. Sin embargo, no se trató de un modelo neoliberal, primero porque éste no se había impuesto en el mundo y, luego, porque civiles y militares que hegemonizaron el gobierno se inclinaban por la protección del mercado brasileño y cierta capacidad del Estado para negociar con el capital transnacional. El notable rol y perdurabilidad del economista Delfim Netto encarnó el rumbo adoptado. Sin embargo, referirse a un supuesto “milagro económico” brasileño no es consistente: durante la dictadura militar hubo un notable crecimiento del PBI pero él fue acompañado de una creciente desigualdad social. Los “milagros” logrados en Europa después de la Segunda Guerra y el “Plan Marshall” consistieron en la construcción de sólidos Estados de Bienestar.

Estados Unidos participó activamente en la preparación y ejecución de este golpe, del cual existen testimonios ciertos que involucraron a la Embajada y a la CIA. En ese mismo año, y casi al mismo tiempo, el país líder de Occidente garantizó que Indonesia en Asia y Congo Kinshasa en África tuvieran dictaduras militares que eliminaron el “peligro comunista”;

ello se logró a través de la matanza de medio millón de indonesios, más o menos pertenecientes al Partido Comunista de ese país y del asesinato del primer presidente congoleño, el nacionalista Patrice Lumumba y de decenas de sus seguidores. De esta forma, Estados Unidos obtenía aliados estratégicos en las diversas regiones del mundo, que podrían actuar como gendarmes locales.

Brasil ofreció la posibilidad de una transición no tan violenta a la dictadura y la colaboración de la mayoría de los políticos; se proscribieron los partidos existentes y, en particular, políticos de “izquierda” aun no comunistas; sin embargo, la mayoría de ex parlamentarios y dirigentes locales aceptó la formación, impuesta por las Fuerzas Armadas, de dos partidos: el oficialista ARENA que siempre ganaría las elecciones y el opositor moderado PMDB. Esto le otorgó una fachada parlamentaria al gobierno militar y evidenció la fuerte participación civil en su gestación y desarrollo. Estos políticos aceptaron el pronto acuerdo de la cúpula castrense de que la elección del Presidente la realizaría el Alto Mando Militar, estableciéndose que habría rotación de mandatarios cada cinco años.

Otra característica de la dictadura brasileña, raramente imitada, fue su preocupación por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo cual permitió una modernización elitista del sistema universitario y la formación de investigadores científicos de primer nivel dentro y fuera del país a través de un significativo programa de becas de posgrado. Se podría atribuir esta orientación a la culta personalidad del primer dictador, General Humberto Castelo Branco, pero luego ella se transformó en una política de Estado, acorde con la preocupación de desarrollar las fuerzas productivas del país.

2.3. El intento de disciplinar a las clases subordinadas y la emergencia de diversas formas de resistencia popular

Hacia 1960, Brasil vivía un período de movilización social derivado de la antigua industrialización por sustitución de importaciones, iniciada en el varguismo, la cual fue acelerada por las medidas desarrollistas del Presidente Juscelino Kubitschek. Aunque el “fantasma” del comunismo no era una realidad amenazante para el orden social, las demandas obreras y campesinas se multiplicaban, dada la gran desigualdad social y la inacción del Estado para atenuarla. El Programa de la Alianza para el Progreso había sugerido que los países de América Latina realizaran reformas agrarias que facilitasen el desarrollo capitalista, lo cual fue ignorado por la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanos debido al veto de la oligarquía terrateniente; esto sucedió naturalmente en Brasil.

En realidad, la combinación de una actitud preventiva frente al desborde social con el pánico y el odio de las clases dominantes hacia los grupos subordinados, explican la coalición social que apoyó la dictadura brasileña, reacia a todo cambio social, por más razonable que fuese, e inclinada a recortar los limitados derechos sociales que provenían del período varguista.

Con ese apoyo, los militares brasileños se propusieron restaurar el orden social, proscribiendo a los partidos y a los dirigentes de izquierda o de prácticas reformistas; controlando a los ya desprestigiados sindicatos herederos del varguismo; estableciendo controles sociales que impidieran la formación de movimientos reivindicativos; y reprimiendo con creciente brutalidad las organizaciones políticas y sociales que canalizaron la insurgencia de las propias clases subordinadas.

Este intento de “disciplinamiento” no fue acompañado por un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que permitiera la creciente inclusión de los trabajadores industriales, tal como sucedería años después en Corea del Sur o Taiwán; por lo tanto, dicho intento agudizó las contradicciones sociales y políticas. No había real acción subversiva en Brasil en 1964, pero la hubo en 1969. Por ello, es preciso subrayar que el “disciplinamiento” fue un intento que hizo retroceder a los sectores populares, en una primera etapa, pero generó diversas formas de resistencia que modificaron la sociedad brasileña. La acción sindical en el importante polo industrial paulista fue la expresión más perdurable y exitosa de esa resistencia en la medida que ella generó el primer partido político de base obrera con posibilidades de acceder al gobierno en la historia de Brasil y de América del Sur. Hubo múltiples focos de resistencia en la sociedad civil que se desarrollaron en instituciones tales como el sector de la Iglesia Católica que adoptó la teología de la liberación o las universidades; por otra parte, surgieron acciones sociales pacíficas en barrios populares y en las zonas rurales carenciadas; el Movimiento de los Sin Tierra fue un producto de ese activismo reivindicativo. Otra de esas formas fue la lucha armada, que se presentó a algunos grupos políticos con vocación reformadora como el único camino posible para lograr modificar la realidad de Brasil, en la medida que la dictadura pareció cerrar todas las vías políticas pacíficas; ella generó el terrorismo de Estado al cual nos referiremos a continuación.

2.4. El desarrollo del “terrorismo de Estado” y sus efectos éticos, jurídicos y políticos

La Doctrina de la Seguridad Nacional enseñaba que las Fuerzas Armadas debían combatir al comunismo a través de técnicas antisubversivas que conformarían el terrorismo de Estado. Entre ellas se distinguían la tortura de los militantes o sospechosos de serlo, la ejecución sin juicio previo y la desaparición de los torturados, el control ideológico del conjunto de la sociedad a través de la denominada guerra psicológica y la expulsión de los puestos del Estado de los subversivos y de cualquier ciudadano que mostrase simpatías hacia posiciones de mejoramiento social. En ese ambiente de guerra total, favorable a la delación, todas las personas con inquietudes pasaban a ser sospechosas. La aplicación de dicha doctrina en Brasil constituyó, como en los demás países de América Latina, una antología del horror; las Fuerzas Armadas, con asesoramiento norteamericano, llevaron

a cabo, entre otras técnicas antisubversivas, la enseñanza y la práctica de torturas salvajes a los detenidos, su asesinato y desaparición. Esas técnicas se aplicaron a activistas de grupos armados, a miembros del Partido Comunista y a simples militantes sociales.

La concepción de la “Seguridad Nacional” transformó a las Fuerzas Armadas nacionales en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, confundiendo el escenario de combate; si ella había nacido en Vietnam y Argelia, éstas eran sociedades colonizadas donde la inmensa mayoría de sus miembros rechazaban la presencia del opresor; no era el caso de Brasil ni de los países de América Latina en 1970; aquí se trataba de Estados formalmente independientes desde el siglo XIX y cuyos Ejércitos estaban profesionalizados desde hacía mucho tiempo. Se instruyó equivocadamente a los militares a combatir el “comunismo” con una organización terrorista que era parte del Estado y que no consideraba seres humanos a sus enemigos, asumiendo de hecho una conducta nazi-fascista. Esto condujo a que los militares se degradaran como personas, cometiendo delitos de lesa humanidad que destruyeron la idea misma del Estado de Derecho. Si un Estado mata centenares o miles de personas sin juicio previo abre el camino a la ley de la selva y al escepticismo frente a la posibilidad de la supremacía de las normas que él dicte. Por ejemplo, la habitual corrupción económica de los funcionarios estatales pasaría a ser un delito menor al lado del homicidio o de la tortura ejecutados por agentes públicos. El daño realizado a la vida en sociedad regulada por el Derecho fue incalculable, sobre todo ante la “imposibilidad” de juzgar a los responsables civiles y militares de esos crímenes de lesa humanidad.

Cabe aclarar que, dada la dimensión de los grupos armados brasileños, la represión que violó derechos humanos elementales no tuvo la dimensión alcanzada en la mayoría de los países hispanoamericanos. Por otra parte, después de la brutal Presidencia del General Emilio Garrastazú Médici, predominó una línea militar que no confundió totalmente los movimientos sociales emergentes con el “enemigo comunista” que debía exterminarse. Todo ello no exime de responsabilidades a los civiles y militares que cometieron delitos de lesa humanidad.

3. Repercusiones de la dictadura brasileña en Argentina y en la región Sudamericana

A través de una somera revisión histórica, debemos subrayar que la dictadura brasileña de 1964 constituyó el anticipo de lo que sucedería en la mayoría de los Estados de América del Sur, lo cual podría extenderse a América Central. Los rasgos que acabamos de desarrollar, tales como la naturaleza cívico militar de las dictaduras, la aplicación de la concepción de la Seguridad Nacional, el intento de “disciplinamiento” social y el ter-

rorismo de Estado, fueron comunes a todos los países. Comparando con lo sucedido en el caso argentino y el de las demás dictaduras sudamericanas, su resultado es muy variado. Puede afirmarse que ninguna de ellas logró un proceso de desarrollo económico social que lograra cierto grado de integración social y, al contrario de su homóloga brasileña, tampoco crearon nuevos sistemas de partidos políticos.

4. La modificación de la proyección política del militarismo argentino (1966 – 1973)

La presencia política de las Fuerzas Armadas argentinas se remontaba a 1930 pero sus intervenciones consistían en interregnos para llamar a nuevas elecciones más o menos libres. Derrocado el peronismo en 1955, los partidos políticos que inspiraron la intervención militar no pudieron crear un sistema político donde el Partido dirigido por Juan Perón fuese derrotado en las urnas; así se llegó a 1966. El ejemplo brasileño y la influencia de Estados Unidos confluyeron en modificar la naturaleza de la acción política de los militares; con el apoyo de grupos económicos hegemónicos y de la Iglesia Católica, las tres Fuerzas se hicieron cargo de la dirección del Estado y planearon un gobierno con objetivos y sin plazos, orientado a desarrollar las fuerzas productivas y refundar la vida política y social del país. Al contrario de sus colegas brasileños, delegaron la Presidencia en un opaco General de formación católica integrista, lo cual acentuó la conformación de una suerte de partido clerical militar. La sociedad, descreída de los mecanismos democráticos, le otorgó un apoyo pasivo.

La aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Argentina se tornaba más absurda que en el propio Brasil. El Partido Comunista era, desde 1946, una organización sólida pero minoritaria que formaba sobre todo excelentes cuadros de la clase media, parte de los cuales permanecían en sus filas. Homologar el peronismo a la amenaza comunista en el momento del golpe era el producto del odio de la clase dominante hacia el reformismo que encarnaba Juan Perón, al cual habían sido arrastrados sus colegas militares. El golpe de junio de 1966 fue totalmente preventivo.

El componente clerical se constituyó en un elemento perturbador de la dictadura argentina, la cual se inició interviniendo las universidades nacionales – con gobiernos democráticamente electos –, y nombrando católicos más o menos integristas para dirigirlas. Al contrario de lo realizado en Brasil, la brutal ocupación de algunas Facultades de la Universidad de Buenos Aires ordenada por el gobierno militar, constituyó un duro golpe para el desarrollo de la ciencia y la tecnología; en pocos meses cerca de mil docentes-investigadores emigraron, mayoritariamente hacia países desarrollados. La Iglesia proveyó de docentes reemplazantes, la mayoría de los cuales tenía escaso nivel para el cargo.

La dictadura argentina proscribió todos los partidos políticos y tenía escasos políticos no organizados que le eran adictos. Por lo tanto, se clausuró el Congreso y se pretendió suspender por tiempo indeterminado la actividad política. Al comenzar su gobierno, el General Juan Carlos Onganía contaba con cierto apoyo sindical que se fue esfumando a principios de 1967, al aplicar un Plan de Ajuste. En ese momento se pretendía desarrollar una economía de mercado con mayor participación del capital transnacional, manteniendo ciertos controles del Estado. Por otra parte, el dictador parecía inclinado al corporativismo franquista y a una larga permanencia en la presidencia, posturas que no compartían la mayoría de los jefes militares; entre ellos perduraban las viejas rivalidades entre las Fuerzas y entre líneas políticas "liberal" y "nacionalista". Onganía no tenía autoridad para erigirse en un tirano ni habilidad para generar una conducción compartida o con un sistema de alternancia; tampoco él estaba convencido de recortar excesivamente el rol económico social del Estado, como se lo exigían los grupos económicos hegemónicos. Todo ello lo alejó del "modelo" brasileño.

Las resistencias sociales, encarnadas por el sindicalismo peronista combativo, se iniciaron en 1968 y estallaron en las puebladas de 1969, de las cuales la más impresionante fue la de Córdoba, conocida como el "Cordobazo". La aparición de organizaciones armadas con crecientes simpatías en sectores medios radicalizados logró que, al fin, hubiese subversión en el país. La dictadura reprimía la acción social y política con métodos a veces inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, de manera no sistemática. La ejecución del General Pedro Aramburu, jefe del golpe de 1955, por un nuevo grupo armado, Montoneros, implicó la crisis final de la dictadura de Onganía y su relevo, decidido por los Jefes de las tres armas. Hubo un período de deliberación militar y, al fin, se impuso la postura del General "liberal" antiperonista, Agustín Lanusse, quien convocó a los partidos políticos para canalizar la realización de elecciones. Más aun, el nuevo dictador comenzó una negociación con el propio Perón para permitir su retorno condicionado al país y a los primeros sufragios libres después de 18 años, realizados en marzo de 1973. El peronismo obtuvo una aplastante victoria, lo cual permitió que Juan Perón fuera electo por tercera vez como Presidente de la Nación, en septiembre de ese año, por una amplia mayoría de votos y un consenso social significativo.

El peronismo en el gobierno se encontró con los efectos económicos del aumento de los precios del petróleo y, sobre todo, después de la muerte de su líder en 1974, no pudo controlar la violencia que había generado su propia proscripción; entonces las clases dominantes no dudaron en restaurar a las Fuerzas Armadas en el gobierno para intentar refundar una vez más el país conforme a sus intereses, eliminando físicamente toda oposición a su proyecto. La Doctrina de la Seguridad Nacional ayudaba a sus propósitos.

4.1. Fracasos y derrumbe de la dictadura argentina (1976-1983)

La dictadura de 1976 tuvo rasgos comunes con la de 1966 y fue su continuidad; consiguió fuertes apoyos civiles en grupos económicos dominantes y en la Iglesia Católica y su personal civil volvió a reclutarse en las filas del laicado católico integrista. Se proscribió a los partidos políticos y sólo se mantuvieron relaciones con políticos aislados de sus organizaciones; el Poder Legislativo volvió a ser clausurado. Dichos partidos se mantuvieron orgánicamente distantes del proyecto conducido por los militares, aunque permitieran de hecho la participación de sus miembros en funciones locales o diplomáticas. Las tres Fuerzas Armadas se dividieron por tercios iguales las funciones de dirección del Estado, así como las tareas de represión. No sin dificultades y prolongadas pugnas entre Ejército y Marina, se acordó que la presidencia rotaría cada cinco años entre Jefes del Ejército.

Sin embargo, los mencionados grupos económicos impusieron en esta oportunidad a uno de sus más conspicuos representantes, José Alfredo Martínez de Hoz, con la intención de poner fin al intervencionismo “estatizante” en la economía y abrirla al comercio internacional para eliminar sectores no competitivos. Se supuso que ello terminaría con la alta inflación que se había instalado en 1975 (cerca de 90% anual); para lograrlo se reforzó la presencia de economistas neo-liberales formados en la “escuela de Chicago” en el equipo económico, tal como estaba sucediendo en Chile.

La dictadura de Jorge Videla decidió exterminar a la dirigencia sindical radicalizada, cualesquiera fuesen sus adscripciones políticas. Así, logró que la actividad de las comisiones internas en los lugares de trabajo cesara o se redujera considerablemente, lo cual facilitó la aplicación de un drástico recorte de los derechos laborales que regían desde los años cuarenta. Sin embargo, se respetó la vida de los dirigentes peronistas de los sindicatos intervenidos por militares o actuantes, y se comenzó a negociar con ellos. Es posible que ello fuese la consecuencia del temor de los grupos dominantes a la emergencia de un gremialismo clasista. En 1980 se intentó aplicar una Ley Sindical que prohibía la actividad política de los sindicatos, lo cual sólo aumentó el grado de enfrentamiento con una buena cantidad de organizaciones confrontacionistas.

Para realizar este proyecto fundacional se requería una acción represiva de alcances masivos; las organizaciones guerrilleras, políticamente debilitadas durante el interregno democrático, fueron una buena excusa para poner en marcha un plan de exterminio de sus militantes, de todos los sospechosos de serlo y, finalmente, de cualquier opositor social o político a la dictadura. El sistema de terror organizado por las Fuerzas Armadas incluía numerosos “campos de concentración”, eliminación física de decenas de miles de prisioneros, apropiación de niños nacidos en esos campos y confiscación de los bienes de los considerados subversivos. Además, se persiguió o encarceló a los dirigentes de la central sindical que había per-

geñado el proyecto industrialista de 1973 y medio centenar de empresarios también fueron confiscados en oscuros ajustes de cuentas entre competidores económicos; esto mostró la magnitud de la pugna entre fracciones de la burguesía. La represión argentina combinó elementos de los genocidios nazi y franquista, particularmente exaltados por la extrema derecha argentina.

La resistencia sindical peronista se había manifestado a partir de 1979; entonces ya tenían presencia local e internacional los organismos de Derechos Humanos que escribieron páginas de dignidad y heroísmo desde 1976. La llegada a la presidencia norteamericana de James Carter complicó la imagen internacional del país, tal era la dimensión criminal del accionar estatal. El desgaste de la dictadura, a partir de 1980, multiplicó las acciones de las diversas formas de resistencia, pese a la parálisis que había generado la enorme dimensión del terrorismo de Estado.

En 1978, la dictadura dirigida por Jorge Videla casi llegó a la guerra con su homóloga chilena, la cual fue evitada por la mediación del Vaticano y la presión de Estados Unidos. Se trataba de un importante conflicto limítrofe que hubiera asegurado a Argentina la salida al Océano Pacífico. La negociación con Chile y el ulterior arbitraje de la Corona inglesa fueron mal manejados por el "partido" militar desde 1970, con lo cual Argentina sufrió una importante pérdida en su proyección internacional.

Internamente, el proyecto económico de Martínez de Hoz se vio trabado por sectores militares que se opusieron al achicamiento o desaparición de las empresas estatales. La inflación continuó siendo elevada y la reforma financiera realizada por la dictadura condujo a una descontrolada especulación. El régimen perdía los tibios apoyos iniciales y las Fuerzas Armadas temieron la radicalización del sindicalismo encuadrado por el reformismo peronista siempre vigente. Esto condujo al relevo de Martínez de Hoz, en 1981, al concluir la presidencia del dictador Videla. Lo sucedió un gobierno de alianza entre diversos sectores de la burguesía, que se revelaron incapaces de acordar una línea económica sustentable; por ello, la dictadura del General Roberto Viola duró menos de un año y fue sustituida por la del General Leopoldo Galtieri. En un clima cada vez menos favorable al gobierno, el nuevo presidente designó a un ministro de economía liberal que retomaría el proyecto de Martínez de Hoz.

Quizás para asegurar la continuidad de la dictadura argentina, los jefes militares decidieron la recuperación de las Islas Malvinas, ocupadas desde el siglo XIX por Gran Bretaña, interpretando erróneamente algún guiño del Pentágono y creyendo que Estados Unidos valoraba mucho la presencia argentina en la lucha antsubversiva centroamericana. La incapacidad de la Junta argentina para comprender la postura del gobierno de Ronald Reagan y para negociar una salida pacífica, condujo a una guerra catastrófica para la nación sudamericana que concluyó con su humillante derrota. Así llegó a su fin el período más sombrío de la historia argentina

del siglo XX, dejando una sociedad más empobrecida y desarticulada y con heridas que aún no han cicatrizado. La economía, nunca del todo ordenada, fue seriamente dañada, habiéndose multiplicado la deuda externa por diez sin lograr realizaciones significativas. El inicio de la desindustrialización fue otro saldo evidente de este período. Tal era el desprestigio de las Fuerzas Armadas, cuyo único apoyo se encontraba en la mayoría de la cúpula de la Iglesia Católica, que no pudieron negociar con los partidos políticos la inmunidad de sus miembros comprometidos en crímenes de lesa humanidad ni ningún aspecto de la transición a la democracia. Gracias a ello, cerca de trescientos militares y algunos civiles purgan prisión por genocidio e imprescriptibles crímenes de lesa humanidad, tal como lo dispuso la Justicia argentina en los últimos siete años.

4.2. El auge de las dictaduras en la región sudamericana y el rol de Estados Unidos

Dado el rol que ya tenía Brasil en América Latina y sobre todo en Sudamérica, no es de extrañar que la dictadura brasileña fuese imitada por muchas Fuerzas Armadas de la región, dado el grado de igual o mayor conflictividad que vivían sus sociedades y sus Estados. Más aun, Estados Unidos alentaba esta solución sociopolítica para evitar que se repitiese otra Cuba. Como vimos en el caso argentino, las imitaciones no fueron iguales al original, dada la gran variedad de realidades sociales y políticas y a la propia dinámica histórica.

Es llamativo que los militares tomaran el control político de sus Estados en Bolivia (1965 y sobre todo 1971), Argentina (1966), Perú (1968), Ecuador (1972), Chile (1973) y Uruguay (1973). En Paraguay, la dictadura del General Stroessner se había iniciado en los años cincuenta pero adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la cual fue precursora. En Bolivia, las Fuerzas Armadas se dividieron a fines de los años sesenta y un grupo reformador dio un golpe de Estado liderado por el General Juan J. Torres, en 1970, el cual propuso cambios sociales significativos, rechazados por las clases dominantes. Un año después, los partidarios de "la seguridad nacional" derrocaron sangrientamente a Torres y encumbraron al General Hugo Banzer al frente de una represiva dictadura, luego que Banzer organizó un partido de centro derecha y llegó a ser elegido por el voto popular a fines del siglo XX. En Perú un grupo de oficiales reformistas, liderado por el General Juan Velasco Alvarado, gobernó entre 1968 y 1975 sin apoyo formal de ningún partido político, realizando significativas reformas sociales; ellos fueron desplazados por el General Francisco Morales Bermúdez con el apoyo de Estados Unidos, y el Estado adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional. En los años noventa esas Fuerzas Armadas combatieron la insurrección del Partido Comunista Sendero Luminoso con la misma barbarie que sus colegas de la región y un espantoso saldo de más de setenta mil asesinados y detenidos desaparecidos, en su gran mayoría indígenas.

Luego, el dictador civil Alberto Fujimori, al frente del Estado peruano durante esa represión, fue sancionado por crímenes de guerra una vez restablecidas las formas democráticas. En Ecuador, el General Guillermo Rodríguez Lara ensayó algunas reformas económicas y sociales en 1972, sin contar con el apoyo de los partidos políticos, siendo destituido en 1976 por las Fuerzas Armadas, presionadas por Estados Unidos.

Salvo en Chile, gobernado por un Frente Popular con un programa anticapitalista y con presencia de un fuerte Partido Comunista, en los demás Estados la amenaza de la soviétización era endeble. Los Partidos Comunistas no habían congregado un número decisivo de seguidores, en parte por las persecuciones sufridas pero, sobre todo, por la influencia de los nacionalismos populares como el APRA peruano, el MNR boliviano, Acción Democrática en Venezuela, etc.

Puede afirmarse que entonces las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la vida política para clausurar la etapa de los reformismos populistas que irritaban a las clases dominantes, para eliminar a los Partidos Comunistas y para intentar establecer un orden económico que demandaba el capital transnacional. Estados Unidos abandonó en los años sesenta su inclinación a favorecer la democracia política, haciendo el juego de los sectores más reaccionarios de los países de la región y congelando toda perspectiva de reformas sociales. La consecuencia de ello fue, en muchos casos, el estancamiento económico y la profundización del subdesarrollo. Clausurado el camino de los imprescindibles cambios sociales, el drama de la desintegración y la marginalización se profundizó.

Cuando la potencia hegemónica adoptó la política de defensa de Derechos Humanos como una estrategia de la Guerra Fría, hacia fines de los años setenta, la etapa de las dictaduras en América del Sur se fue agotando. El Presidente Ronald Reagan continuó la línea iniciada por Carter y se inició la era de las transiciones a la democracia política.

4.3. El Plan Cóndor

Uno de los más siniestros capítulos del militarismo en el gobierno de los Estados de América del Sur fue el denominado Plan Cóndor. Se trató de un explícito acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay para que sus efectivos pudiesen operar en cualquier país, torturando, asesinando y desapareciendo compatriotas considerados subversivos. Así es que, ciudadanos argentinos desaparecieron o fueron asesinados en Chile, Uruguay, Brasil y Perú. En la Argentina fueron eliminados chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos, incluidos los generales democráticos Prats (chileno) y Torres (boliviano) que estaban exilados en Buenos Aires. Ello se reprodujo en todos los países mencionados y con particular virulencia en Chile y Argentina, países donde, al momento de los golpes de 1973 y 1976, había muchos asilados políticos de países vecinos.

A principios de los años setenta, ante la insurgencia del Movimiento Tupamaros en Uruguay o la perspectiva del triunfo electoral del recientemente creado Frente Amplio de izquierda reformista, existió el trascendido de una intervención militar brasileña para combatir la subversión comunista ante la pasividad de las Fuerzas Armadas uruguayas. Quizás esos rumores fueron la causa de una mayor coordinación entre los cuerpos militares a cargo de los Estados de la región.

Esa cooperación se manifestó políticamente en el apoyo de la dictadura argentina a un golpe de Estado en Bolivia, durante 1980, con el fin de restaurar el gobierno militar que el dictador Banzer había devuelto a los partidos políticos. El General Luis García Meza fue la cabeza de ese régimen y rápidamente trascendió su complicidad directa o indirecta con el narcotráfico, lo cual ayudaría a poner fin al intervencionismo castrense en el país andino en 1982.

La documentación existente en la actualidad no deja dudas sobre el accionar semi clandestino y delictivo de los militares de la región, seguramente bendecido por sus asesores norteamericanos. Más aun, los militares chilenos llegaron a operar en Estados Unidos e Italia para eliminar dirigentes civiles considerados subversivos, lo cual generó tensiones diplomáticas. Al contrario, los norteamericanos aceptaron la presencia argentina en la guerra contra la insurgencia del FMLN salvadoreño, la cual se inició en 1980 y continuó hasta la guerra de las Malvinas; ante la actitud adoptada por Estados Unidos, la dictadura retiró sus efectivos militares de América Central.

Desgraciadamente no se avanzó en el juzgamiento de los responsables del accionar internacional de las dictaduras de “la seguridad nacional” por su participación en los numerosos crímenes derivados del Plan Cóndor.

Conclusiones

Del material analizado para realizar la presente comunicación se derivan algunas conclusiones significativas:

a) Los rasgos principales de la dictadura militar brasileña iniciada en 1964 se repiten en los regímenes “de la Seguridad Nacional” de América del Sur, de la misma forma que la influencia de Estados Unidos en su gestación, desarrollo y ocaso.

b) En América Latina los militarismos de los años sesenta y setenta fueron intentos fallidos de superar el subdesarrollo, los cuales fracasaron por la incapacidad de las clases dominantes de realizar reformas económicas, sociales y políticas que permitieran la emergencia de Estados capitalistas con un grado de integración social mínimamente satisfactorio.

c) Las dictaduras cívico militares derivadas de la Doctrina de la Seguridad Nacional fueron diversas y de trayectorias diferentes, como lo demuestran los casos analizados de Brasil y Argentina. Sin embargo, la simultaneidad de esos procesos políticos comprueba la importancia que tuvo la formación militar en esa Doctrina.

d) Las resistencias obreras y populares contra las dictaduras militares no pudieron derrocarlas pero modificaron las sociedades sudamericanas, creando variados movimientos sociales reformadores.

Referências

CANOVAN, M. *Trust the people: populism and the two faces of democracy*. *Political Studies* Oxford, 1999, v. 47, n. 1, 2-16.

GALISSOT, R. (Ed.). *Les populismos du Tier Monde*. París: L'Harmattan, 1997.

LACLAU, E. *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1993.

NUN, J. *Amérique Latine: la crise hégemonique et le coup d'Etat militaire*. París: Sociologie du Travail, 1967.

PANIZZA, F. (Comp.). *Populism and the mirror of democracy*. Londres: Verso, 2005.

TAGUIEFF, P. *Le populismo et la science politique: du mirage conceptuel aux vrais problèmes*. París: Vingtième Siècle, 1997.

VILAS, C. M. Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del neo-populismo latinoamericano. *Estudios Sociales*, XIV, primer sem. 2004.

Recebido em 03 de junho de 2014.

Aprovado para publicação em 06 de junho de 2014.